

ra del espíritu del artículo 8º referido. Por tales considerandos, y con fundamento del artículo 101 de la Constitución general, fallo que debía declararse y se declara: que la Justicia Federal proteja y ampara al C. juez G. Berduzco contra los actos y determinaciones del C. juez 6º Constitucional de paz, en lo relativo á costas judiciales y embargo que libró para hacerlas efectivas. Así definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firmó el C. juez 3º suplente del Juzgado de Distrito de este Estado de Querétaro, Lic. Francisco Villaseñor, ordenando se hagan á las partes las notificaciones correspondientes, y que se eleve este expediente en revision á la Suprema Corte de Justicia de la Nación: doy fé.—*Francisco Villaseñor.*

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 31 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por Don Jesus Gutierrez y Berduzco, como apoderado de D. Guadalupe Barragan contra el alcalde 6º constitucional de Querétaro, como executor del acto por el que se cobran costas á Barragan en un juicio verbal que en su contra promovió el Lic. D. Luis Garfias, y considerando: que el acto reclamado importa la violacion de la garantía individual establecida por el art. 17 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma el auto pronunciado el 17 del actual por el juez de Distrito de Querétaro, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. José G. Berduzco contra los actos y determinacion del C. juez 6º constitucional de paz, en lo relativo á costas judiciales y embargo que libró para hacerlas efectivas.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certifi-

cada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto 3 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Juan Antonio Macdónel á nombre de María Higinia Cornelio y Rosario Damian, contra el Gefe político de San Juan Bautista, por violacion de garantías.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Fiscal dice: En el pedimento número 995, ha expuesto este Ministerio, con toda claridad su opinion acerca del recurso de amparo que han promovido las Sras. Mª Higinia Cornelio y Rosario Damian, contra la providencia de la Gefatura política que privó á la primera del derecho de tener á sus hijos menores, dada la prision de su esposo el C. Francisco Damian.

Por el informe justificativo dado por la autoridad responsable, se dice: que las Sras. Rosario Damian é Higinia Cornelio, se hallan detenidas para esclarecer los hechos de culpabilidad de homicidio que resulta contra el C. Francisco Damian; y que para evitar que se pusiesen de acuerdo, se han puesto á ellas y á sus hijos en diferentes casas, en donde se hallan á disposicion del Juzgado de 1ª instancia, que es el juez del conocimiento

de los hechos que se imputan al O. Francisco Damian.

La justificacion es contraproducente porque el Ejecutivo carece de las facultades que solamente son inherentes al poder judicial, que en estos casos se ve obligado á proceder con arreglo á las leyes que norman el derecho privado.

Si la autoridad judicial es la competente para conocer de los hechos que se imputan á Damian, ¿por qué el Gefe político es quien despoja á la madre de la posesion de sus hijos, que la ley y la naturaleza amparan? ¿qué objeto puede tener la accion del poder administrativo en personas sujetas á distinto fuero, con la que se violan las garantías que la Constitucion reconoce en toda persona social?

Es indudable que el respeto á la autoridad, la obediencia al poder constituido, es una obligacion; pero la autoridad y el poder público no pueden obrar arbitrariamente, y las leyes le fijan los círculos dentro los que tienen que obrar. De otro modo los particulares pueden resistir sus mandatos ó acudir al amparo de una justicia moderadora que les conserve la inviolabilidad de sus derechos naturales.

Reproduce por tanto el Fiscal, la conclusion del pedimento señalado al principio el actual.—San Juan Bautista: Junio 30 de 1872.—*P. Rosado.*

Otro sí: La falta de papel por parte de los quejosos obliga al Fiscal á usar de la concesion que el artículo 29 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, concede á las personas notoriamente pobres.—San Juan Bautista, Junio 30 de 1872.—*P. Rosado.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Julio 9 de 1872.—Vistos: la instancia presentada en siete de Junio último por el O. Juan Antonio

Macdónel á nombre y con carta poder de María Higinia Cornelio y Rosario Damian, solicitando el amparo de la Justicia Federal contra una providencia de la Gefatura política de este partido, que extrajo de su poder á sus hijas, cuyos nombres no se expresan, con infraccion del artículo 16 de la Carta fundamental, en que apoyan su pretension: el pedimento Fiscal número novecientos noventa y cinco adhiriéndose á la demanda: la primera comunicacion del O. Gefe político en que manifiesta no poder producir el informe requerido, por no haberle aun contestado el O. Gobernador á quien se dirigió sobre el particular; la segunda del mismo en que ya transcribe la contestacion del Gobierno, segun la cual las expresadas María Higinia y Rosario, parientes de los presuntos reos del homicidio cometido en Chilapa, y teniendo indudable conocimiento del delito, habian sido depositadas ellas y sus hijas en diferentes partes para evitar que se pudiesen de acuerdo, quedando á disposicion del Juzgado de 1ª instancia que es el juez del asunto: vistos en fin, los últimos alegatos de la parte promovente y del O. Fiscal, y considerando: que el haber sido María Higinia Cornelio y Rosario Damian desapoderadas de sus hijas por disposicion del O. Gobernador y mediacion de la Gefatura política es un hecho constante de las dos comunicaciones de esta: que este hecho ataca los derechos de familia garantizados por el artículo diez y seis de la Constitucion nacional vigente: que las circunstancias que se exponen en la comunicacion del Gobierno trascrita por el O. Gefe político, lejos de legalizar el acto, ponen mas de manifiesto la violacion en él acometido, pues siendo, como en ella se asegura, el juez de 1ª instancia el del conocimiento del asunto de las Sras. Cornelio y Damian, no hay duda que de esta autoridad y no de la política debiera haber emanado la providencia reclamada, así como

el mandamiento escrito y motivado que se exige en el citado artículo diez y seis, y que no consta expedido ni por esta ni por ninguna otra autoridad, por cuyas razones, con fundamento del citado precepto constitucional, y arreglado al artículo trece de la ley de veinte de Enero de mil ochocientos setenta y nueve, el Tribunal decreta, primero: la Justicia de la Union ampara y protege á las promovedas María Higinia Cornelio y Rosario Damian contra la providencia gubernativa que las privó de sus hijas. Segundo: sáquense las copias de estilo, y notificado á quienes corresponde, elévense los autos á la Superioridad para los efectos de la ley. Lo proveyó y firmó el C. Lic. Limbano Correa, juez de Distrito del Estado por ante mí su escribano que doy fé.—*Limbano Correa.*—Ante mí, *Gabriel Sosa.*

**EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.**

México, Agosto 2 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Juan Bautista por el C. Juan Antonio Macdónel, á nombre y representación de María Higinia Cornelio y Rosario Damian contra los procedimientos del Cefe político de aquel partido, que extrajo á las hijas de las peticionarias de la casa paterna y las mantiene en depósito, alegando las promovedas que con este hecho se violan las garantías otorgadas en el artículo 16 de la Constitución Federal de la República.—Vistas las constancias de autos y considerando: que la Gefatura del centro en uso de sus atribuciones procedió á la aprehension de las personas que segun los datos que poseía estaban complicadas en un delito; que dicha autoridad ha obrado conforme á las leyes sometiendo á las presuntas reos al Juzgado que conocía de la causa, y que si se ha excedi-

do motivando alguna responsabilidad, las quejas tienen su derecho para hacerlo valer donde corresponda, con tales fundamentos se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de San Juan Bautista que concedió el amparo á las peticionarias, y se declara que la Justicia de la Union no ampara ni protege á las quejas, en las garantías á que se refiere el presente juicio.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Velazquez.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M<sup>a</sup> Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto 8 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

**AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por el C. Narciso Guirao, contra actos de la comision de salubridad pública del Ayuntamiento de San Cristóbal.**

**PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.**

**C. Juez de Distrito:**

El C. Narciso Guirao, con fecha 8 del mes anterior, se presentó á su merecido Juzgado pidiendo se le amparase contra los procedimientos arbitrarios del C. Gefa político de este Departamento que, violando los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, mandó, en terrenos de su propiedad, abrir una zanja para des-